

## **ACTORES Y ACTIVIDADES ILÍCITAS**

En Centroamérica hay actores no tradicionales que han adquirido la capacidad de transformar radicalmente el contexto de la región como la conocemos hasta hoy. Su influencia alcanza ámbitos de la vida cotidiana cómo, dónde se puede transitar o no, qué se puede cultivar y vender, incluso dónde se puede vivir. Se trata de actores que ejercen actividades ilícitas, y su poder se basa en la riqueza que dichas actividades les reportan. Estos recurren a la violencia, el terror y la violación sistemática de derechos con el objetivo de controlar territorios, inversiones, relaciones, incluso instancias del Estado, y así proteger sus propios intereses. Son además estas instancias del Estado las que en algunos casos forman un entramado institucional que les ampara, dentro de los sistemas políticos de la región.

La región, además, está siendo transformada por cambios en los bloques de poder mundial, cambios expresados en la reconfiguración de alianzas geopolíticas, tratados comerciales y políticas financieras, así como por el cambio climático. En este contexto, la región, geográficamente pequeña, se ve debilitada ante la embestida de “inversión ilícita” proveniente de actores que actúan entre Colombia y México, en su movimiento hacia los Estados Unidos y Europa. Los países se ven forzosamente involucrados en la cada vez más extensa red de intereses criminales.

Recientemente las actividades relacionadas a la cadena de las sustancias ilícitas se extienden a otros ámbitos de la realidad centroamericana, no sin antes unir a la región en un clima de inseguridad y violencia. La gigantesca acumulación económica les permitió penetrar otros mercados lícitos como ilícitos, nuevos territorios y esferas políticas más elevadas. Aunque actividades ilícitas como la trata de personas, de armas o el contrabando son problemas serios, es el tráfico de cocaína el que representa la fuente principal de ganancias ilícitas en la región. Por ello, en este esfuerzo nos enfocaremos en caracterizar sus profundos impactos, sus economías, sistemas políticos y su gobernanza territorial.

### **Actores ilícitos en el tráfico de sustancias ilícitas**

En los últimos años, Centroamérica se ha ido perfilando como un corredor logístico estratégico por su posición geográfica para actividades lícitas, pero también ilícitas, en particular en función del tráfico de cocaína proveniente de países productores en Sudamérica hacia su principal mercado, los Estados Unidos. Desde el 2008, se han identificado en la región tres rutas principales de tránsito que son utilizadas para estas actividades y que se adaptan al contexto de cada país de la región: la ruta terrestre, el tráfico marítimo litoral y el tráfico aéreo de corto alcance (Argueta, 2014).

Hay tres tipos de organizaciones núcleos fundamentales que juegan un papel dominante en la región, particularmente en el Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA). En el nivel territorial más bajo, están las pandillas, también conocidas como *maras*,<sup>1</sup> que operan principalmente mediante actividades criminales en zonas densamente pobladas (urbanas y suburbanas), aunque se prevé su migración hacia zonas rurales con la implementación de políticas de seguridad cada vez más represivas. Ellos mantienen contacto con los carteles de narcotráfico para facilitar el transporte de drogas y armas a través de los territorios que controlan. En términos económicos, su principal fuente de ingreso lo representan las extorsiones (UNODC, 2012). En un nivel territorial medio, los transportistas y otros actores locales facilitan el tránsito de la cocaína hacia el norte. Estos se caracterizan por operar en zonas escasamente pobladas y se componen tradicionalmente por familias poderosas, empresas de transporte, etc. Por último, en su expresión territorial más amplia,

<sup>1</sup> Organizacionalmente, son grupos heterogéneos, aunque a grandes rasgos se identifica una jerarquía compartida: Suelen componerse por un liderazgo transnacional, las clicas nacionales o sub-nacionales, y finalmente por las “maras de barrio”.

están los carteles mexicanos. Estos han mantenido una actividad en toda la región, sin embargo, sus operaciones son mucho menos visibles, con menor expresión territorial en Nicaragua, Costa Rica y Panamá (Argueta, 2014).

Este tema no es nuevo para una gran variedad de actores, pero muchos de los análisis realizados hasta el momento no han permitido dimensionar las lógicas operantes, los alcances e implicaciones de la problemática. Sin duda, la violencia, presencia de actores “no estatales” violentos en los territorios, y la corrupción son temas fundamentales para la sociedad. Y lo que se suele referir como “no gobernabilidad” en los territorios tiene un efecto profundamente perverso para la construcción de opciones de desarrollo para las comunidades rurales. Sin embargo, una gran parte de estos análisis se enfocan de manera parcial en la problemática.

Discusiones de “no gobernabilidad”, llevan implícitamente un concepto de lo que “debe ser” las relaciones de autoridad en territorio, que, en muchos casos, o no ha existido, o solamente de forma muy débil (derecho de Estado democrático). Enfoques en la “construcción de capacidad del Estado” o “corrupción” enfatizan categorías binarias de Estado/no Estado, legal/ilegal, cuando las relaciones de autoridad, coerción y control están profundamente entremezcladas entre el Estado y esferas privadas de las sociedades. Las comunidades rurales frecuentemente son las que sufren los peores impactos de estas actividades, en su mayoría envueltos en sistemas ilícitos que han institucionalizado formas ilegales de autoridad y control, con implicaciones profundas para decisiones políticas, económicas y sociales en los territorios.

## Flujos de cocaína, actores ilícitos y sus lógicas económicas

Los cinco ámbitos relacionados a la cocaína comprenden la producción, transformación, trasiego, venta y lavado. La producción y transformación se realiza en su gran mayoría en Sudamérica, donde se cultiva la hoja de coca y se transforma en Clorhidrato de Cocaína (HCL, por sus siglas en inglés; cocaína en polvo). Desde principios de los años 2000, Centroamérica se ha vuelto una región de mayor importancia para el trasiego, venta y lavado, los cuales representan las principales actividades de narcotráfico en nuestra región.

Los ingresos de cocaína por aire y mar, y la cantidad final que toca tierra crece según el flujo se mueve hacia el norte, según estimaciones de la UNDOC (2012), durante el 2010 los valores en millones (US\$) de flujos de cocaína que tránsito por la región corresponden a Guatemala (4,000), Honduras (1,949), Nicaragua (910), Costa Rica (896) Panamá (200), Belice (74) y El Salvador (60) respectivamente. La potencia del impacto de estos flujos está directamente vinculado a las políticas agresivas de prohibición, lo que suben sustancialmente las rentas ganadas por las organizaciones ilícitas conforme vaya transitando al norte. El efecto directo es mayor potencia en términos de violencia, mayor capacidad de corromper a la institucionalidad pública, y de ejercer dominio sobre los territorios.

Si bien la lógica primordial de los flujos de cocaína en la región es de asegurar los caminos y puntos de trasiego, el comportamiento de estos actores en la sociedad, pocas veces se explica solamente por esta razón. La articulación necesaria de estos actores con la economía legal les coloca en una serie de otras estrategias de control territorial y de influencia del sistema político, para asegurar la continuidad de otros flujos de acumulación. Se observan una variedad de casos importantes de actores quienes utilizaron su posición política para vincularse a las actividades ilícitas (por ejemplo, redes militares), y otros en casos de empresarios poderosos.

Actores con relativamente poca influencia también han aprovechado oportunidades, por ejemplo, empresas pequeñas de transportación, bufetes, especialistas de violencia, o personas con conocimiento especial sobre rutas de tránsito específicas en fronteras. En cualquier caso, es importante entender que cualquier esfuerzo de comprender estos actores solamente como ilícitos será muy limitado: son precisamente sus intereses económicos y políticos en la esfera legal que determina la configuración particular de la influencia de determinado actor en la sociedad. Los flujos de tráfico sencillamente brindan una conexión a un poder social enorme, que puede ser movilizado para una enorme gama de fines, más allá de las actividades ilegales en sí.

Esto se observa desde estrategias muy locales hasta tendencias macro en la región. A nivel local, hay amplia documentación sobre las inversiones en la tierra para el cultivo de la palma africana y la ganadería como actividades

importantes de lavado de dinero para facilitadores locales del tráfico ilegal (McSweeney et al., 2017). También, se registra la realización de voluminosas inversiones en otros cultivos (melones, por ejemplo), turismo, inmobiliarias y la industria del juego (casinos, juegos de azar, loterías, etc.) Además, existe una categoría de bancos "offshore" en Guatemala, donde el dinero de los clientes que realizan depósitos promedios de US\$100,000 se consideran legales<sup>2</sup>.

Uno de los rasgos distintivos de las sociedades de mercado es el poder social sin límite que dota los flujos de acumulación a particulares en la sociedad. Con este marco, podemos entender los ingresos ilícitos como una fuerte carga que facilita el establecimiento de nuevos poderes en la sociedad; pero, es importante entender que este poder no es únicamente desplegado para fines de reproducción de los flujos ilícitos, sino que, se expresa de *diversas formas* según las opciones políticas-económicas de determinados actores. Las diferentes composiciones de actores ilícitos y su rotación, brinda cierto nivel de imprevisibilidad y carácter aleatoria sobre estas lógicas "adicionales" con las que operan en la sociedad.

## Territorialidad de lo ilícito

Transformaciones territoriales a causa de narcotráfico se han documentado en mucho detalle en la región. La dinámica de "narco-deforestación" ha causado la pérdida de grandes masas de bosque en zonas como Alta Verapaz, Petén, Olancho, Honduras, la Muskitia hondureña, la Costa Atlántica en Nicaragua, y hay indicios de posibles impactos más recientes en Panamá. Este fenómeno ha sido responsabilidad de presiones extremas, despojo y violencia contra muchas comunidades forestales de la región, incluyendo los Pueblos Q'ueqchí, Miskitu, Pech, Tahwaka, por mencionar solo algunos ejemplos. La lógica particular de estos actores incluye el tránsito, pero también pasa por establecer control y autoridad en el territorio (a veces asociado a tácticas paramilitares) así como una salida para el lavado de dinero, y sus propias estrategias de inversión económica en la palma africana y la ganadería (McSweeney et al., 2017). En Guatemala, el control territorial de agentes locales en colaboración con carteles ha generado un sistema de control y autoridad territorial continuo en los últimos 15 años.

Si bien este fenómeno tiene rasgos comunes, también observamos una diversidad temporal y espacial importante. Las particularidades de las alianzas entre operadores locales y las redes de tránsito (carteles), y la diferente articulación con el aparato estatal muestran diferencias importantes en los tipos de comportamientos permitidos o no; algunas áreas son permanentemente bajo control total de estos actores y la mera presencia de personas no autorizadas puede ser detonante de violencia. Muchas otras áreas y economías permiten una especie de convivencia más flexible siempre y cuando ciertos flujos de acumulación no se interrumpen. Y estas áreas pueden cambiar en el tiempo: por ejemplo, algunos carteles utilizan estrategias de beneficios locales para lograr legitimidad (y colaboración) con los lugareños, mientras también se observan otros métodos más arrasadores, asociados con paramilitarismo. Es precisamente la inestabilidad inherente de estos regímenes que explica el constante, pero diferentes usos de la violencia.

La geografía incide de forma importante en la ubicación de estas dinámicas: se trata no solamente de áreas forestales, remotas y cercanas a fronteras, sino también los contextos sociales. Hay evidencia que indica que la existencia de la fragmentación social brinda contextos propicios para estos actores, donde mejor pueden ocultar sus acciones (frecuentemente echando gasolina al fuego). En Nicaragua, Honduras y Guatemala, se observa una continuidad importante entre los conflictos de los años 1980 y 1990 y el despliegue territorial de actores ilícitos.

Además de los territorios de "narco-deforestación", se reporta también la incidencia de actores ilícitos en plantaciones de café, e incluso con control sobre la mano de obra de estas áreas en El Salvador y Honduras. La captación forzosa de ganancias por medio de estos métodos también puede estar impulsando impactos igualmente profundos como en los bosques, aunque sean mucho menos reportados o visibles. Cabe señalar, también, que los impactos de estas actividades trascienden mucho los espacios territoriales donde se observan los regímenes de control de actores ilícitos. Por ejemplo, se observan múltiples "efectos de desplazamiento" del lavado de dinero, que cambia la estructura de mercados y socava a otros emprendimientos locales (como la producción de maderera en Honduras). Otros efectos incluyen una especie de

<sup>2</sup> Internacional Narcotics Control Strategy Report. Volume II Money Laundering (2019)

“enfermedad holandesa”, o la inflación de la moneda nacional por el ingreso masivo de divisas por el lavado y la subsecuente afectación a empresas legítimas.

Los efectos sociales indirectos se relacionan con la alta disponibilidad de armas y especialistas de violencia (sicarios), así como la normalización de la violencia, que junto con la crónica impunidad aumentan la recurrencia a la violencia como solución a conflictos. Se observa también tendencias preocupantes de los imaginarios en la sociedad: en algunos casos, los líderes criminales han vuelto a tener un estatus mítico, e incluso glorificado, expresadas en nuevas simbologías de estatus y poder, en vestimenta, música, adornos, e incluso sincretismo en algunos lados con creencias religiosas. La proliferación de estos símbolos y valores, más allá del poder directo y coercitivo de actores ilícitos puede tener un impacto profundo en la sociedad, y en particular en las expectativas de proyectos de vida de jóvenes.

Mientras tanto, líderes sociales que promueven alternativas a estas rutas son blanco de una creciente agresión y violencia. La legitimidad que representan estos líderes contrasta con la percepción generalizada de sociedades injustas y autoridades ilegítimas. Estas perspectivas nos ayudan a trascender la comprensión de la violencia como un mero síntoma de “corrupción” general e impunidad asociada con “estados débiles”. La continua violencia en la región, comparable a la vivida durante los conflictos de finales del siglo XX, puede ser más descentralizada que la expresada por organizaciones estatales de generaciones pasadas, pero no deja de ser sistemática y organizada, y manifiesta una relación clara con la economía política lícita-ilícita.

## Implicaciones para una agenda de diálogo e investigación

La combinación entre las dinámicas de la demanda para cocaína con las políticas de prohibición actuales, podría agudizar los efectos ya corrosivos que estos tienen para la sociedad, a menos que se den cambios dramáticos en la forma de abordar estos fenómenos, en particular desde la política exterior de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el andamiaje de corredores logísticos y la penetración de las instituciones estatales ya ha servido como “primer piso” para la expansión hacia otras esferas del mercado y la economía. Por ello, continuar visibilizando esta problemática a nivel regional e internacional y en su dimensión más integral, resulta esencial.

Por otra parte, las comunidades más marginadas –urbanas y rurales remotas– en la región son las que continúan cargando con la mayoría de efectos estridentes y crueles de estas actividades ilícitas, enmarcadas en realidades locales que frecuentemente no son bien comprendidas por actores externos, y la tendencia de afectación es cada vez más hacia la ciudadanía en su conjunto.

Al mismo tiempo, aliados externos pueden manejar información sobre tendencias en la región, o posibles avenidas de apoyo, que no son de conocimiento de los más afectados. Surge entonces la oportunidad de organizar la investigación, compartir ‘lecturas’ y coordinar una actuación más estratégica entre la cooperación internacional, aliados confiables en los gobiernos, ONG alertas y la academia comprometida. Si bien no resolverá el tema del narcotráfico y la actividad ilícita más amplia, por sí misma, puede ser clave para mitigar sus efectos más nocivos, evitar caer en trampas devastadoras y lograr la resiliencia necesaria para que las comunidades lidien y sobrevivan las olas de agresión y violencia que predominan en nuestra región.

## Referencias

- Argueta, O. (2014). *Drug Trafficking and Governance in Central America* en Sanchez-Ancochea, D. & S. Martí I Puig (eds) Handbook of Central American Governance. Routledge Publishers, New York.
- Insight Crime (s.f). *Análisis del crimen organizado*.
- McSweeney, K., Richani, N., Pearson, Z., Devine, J., & Wrathall, D. J. (2017). *Why Do Narcos Invest in Rural Land?* Journal of Latin American Geography, 16(2), 3-29. <https://doi.org/10.1353/lag.2017.0019>
- UNODC. (2012). *Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas* (p. 84). Recuperado de UNODC website: [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC\\_Central\\_America\\_and\\_the\\_Caribbean\\_spanish.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_spanish.pdf)